



Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Distr. general
16 de junio de 2014
Español
Original: inglés

Comité contra la Tortura

49º período de sesiones

Acta resumida de la 1099ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 31 de octubre de 2012, a las 15.00 horas

Presidenta: Sra. Gaer (Vicepresidenta)

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19
de la Convención (*continuación*)

Sexto informe periódico del Perú (continuación)

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

GE.12-47152 (S) 130514 160614



* 1 2 4 7 1 5 2 *

Se ruega reciclar



Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención *(continuación)*

Sexto informe periódico del Perú (continuación) (CAT/C/PER/6)

En ausencia del Presidente, la Sra. Gaer (Vicepresidenta) ocupa la Presidencia.

1. *Por invitación de la Presidenta, la delegación del Perú toma asiento a la mesa del Comité.*
2. **El Sr. Ávila Herrera** (Perú) hace referencia al castigo corporal de los niños y señala que existen leyes destinadas a proteger la integridad física de los niños y los adolescentes. El Código Penal también sanciona los daños infligidos a niños como una circunstancia agravante. Anteriormente, no existía ninguna ley específica relativa al castigo corporal, pero se ha sometido al Congreso un proyecto de ley por el que se prohíbe el uso de cualquier medida correctiva que entrañe un daño para la integridad física de los niños.
3. Por lo que respecta al establecimiento de un mecanismo nacional de prevención de la tortura y la asignación de recursos para este fin, cabe señalar que hay un proyecto de ley pendiente en el poder ejecutivo. Asimismo, se ha presentado recientemente un segundo proyecto de ley, pero aún se tiene que llegar a un consenso respecto de su formulación exacta.
4. En lo tocante a las mujeres privadas de libertad y sus hijos, la administración penitenciaria está adoptando medidas con miras a garantizar condiciones adecuadas para las mujeres presas. Se está considerando la posibilidad de reubicar a las mujeres para evitar el hacinamiento, y las autoridades correspondientes están elaborando programas de apoyo para los hijos de las madres detenidas. También se están tomando medidas para mejorar las condiciones en las cárceles, sobre todo en lo que atañe al hacinamiento, incluidas inversiones sustanciales destinadas a mejorar la infraestructura, construir nuevas cárceles y reforzar la seguridad penitenciaria para ajustarse a las normas internacionales.
5. La cárcel de Challapalca se utiliza por motivos de seguridad pública, dado que en ella se encuentra un gran número de presos implicados en casos de delincuencia organizada y violenta. El hacinamiento y la precariedad de la infraestructura plantean dificultades adicionales. El Gobierno está realizando estudios con miras a construir nuevas cárceles de alta seguridad para los presos peligrosos. La cárcel de Yanamayo, cerca de Puno, fue convertida en una cárcel de mediana seguridad para delincuentes comunes. La decisión de cerrar la cárcel de Challapalca sólo podrá tomarse una vez que se haya aplicado el plan destinado a ampliar la capacidad del sistema penitenciario.
6. La reclusión en régimen de aislamiento es una medida que se impone por un período determinado y de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. No se aplica a las mujeres embarazadas ni a las madres. Los presos son sometidos a régimen de aislamiento en sus propias celdas o en espacios especiales, pero no dejan de ejercer su derecho a disponer de asesoramiento jurídico y a recibir visitas de familiares. Esta medida se aplica rara vez en las cárceles provinciales.
7. La cárcel situada en la base naval del Callao también se utiliza por motivos de seguridad, pues alberga a delincuentes peligrosos y de difícil reinserción social. Se trata de una instalación de alta seguridad, cuyo funcionamiento se rige por las normas internacionales en lo que se refiere al derecho a recibir visitas, contar con representación legal y acceder a programas de tratamiento.

8. Entre otros casos significativos en los que se ha interpretado el delito de tortura, cabe destacar una denuncia que se sometió a la justicia en noviembre de 2011, por la que se acusaba a un alcaide de haber perpetrado actos de tortura. En este caso, se puso de relieve el carácter específico del delito de tortura y el tribunal invocó la Convención contra la Tortura.
9. En lo que atañe a la tortura y la violencia sexual, se ha llevado recientemente ante los tribunales el caso de una víctima que había sido torturada y violada. El fiscal y el Juez presidente calificaron el delito como un acto de tortura, lo que puso de manifiesto que los funcionarios judiciales del Perú se ajustan a las normas internacionales al considerar la violación como una forma de tortura.
10. **El Sr. Cubas Villanueva** (Perú) señala que las estadísticas sobre la tortura se conservan y se han incluido en el informe. No todas las denuncias de tortura presentadas a la Fiscalía de la Nación satisfacen los criterios jurídicos para que se las califique como casos de tortura, y no todos los casos terminan en condenas. Sin embargo, si se impone una pena, ésta conlleva el encarcelamiento, como lo estipula el Código Penal. En algunos casos, el inculpado es absuelto por falta de pruebas o porque existen dudas razonables. En todos los casos, los jueces presidentes son imparciales e independientes y las garantías procesales se respetan.
11. En colaboración con ONG e instituciones académicas, se imparte capacitación a los fiscales y los jueces sobre el tema de la tortura.
12. Por lo que respecta al apoyo financiero y psicológico para las víctimas, la Fiscalía de la Nación ha lanzado un programa nacional de apoyo para los testigos y las víctimas como parte de un proceso integral de reforma. El nuevo Código Procesal Penal prevé medidas de protección para las víctimas. Las medidas de apoyo y protección comprenden ayudas financieras para los testigos que tienen que viajar a fin de prestar declaración.
13. Todos los casos de tortura se transmiten al Instituto de Medicina Legal para ser examinados por expertos. El Instituto puede realizar evaluaciones psicológicas y, desde 2010, cuenta con un grupo especializado de psiquiatras, médicos forenses y psicólogos. Este grupo opera a nivel nacional y presta asistencia a sus varias unidades en todo el país.
14. Se ha solicitado a la Fiscalía de la Nación que examine la posibilidad de crear un registro centralizado de casos de tortura. Esto es factible, pues existe una base de datos nacional para todos los delitos.
15. La prisión preventiva es un período de detención conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos Penales de 1940. Sin embargo, se trata de una medida excepcional y provisional, y nadie puede permanecer en detención más de 36 meses sin ser juzgado. Desde 2004, se vienen adoptando medidas destinadas a aplicar gradualmente el nuevo sistema de procedimiento penal. El nuevo Código Procesal Penal reglamenta la prisión preventiva de forma más rigurosa. En los lugares donde el nuevo Código está en vigor, la población carcelaria se compone de más presos condenados y de menos personas en espera de juicio; además, nadie puede permanecer detenido durante más de nueve meses.
16. La situación provisional de los jueces es un problema heredado de la época en que Alberto Fujimori estuvo en el poder. Desde que se reinstauró la democracia, se han adoptado medidas para afrontar este problema.
17. Todos los casos de tortura se someten a un subsistema especializado compuesto por el Ministerio Público y la Sala Penal Nacional, que se ocupa de investigar y enjuiciar estos casos. Actualmente se está investigando el caso Gerson Falla y varias personas están siendo juzgadas por delitos que incluyen la tortura con agravantes, el abuso de poder y la obstrucción de la justicia.

18. En relación con el caso de Bagua, señala que los casos de violaciones de los derechos humanos se someten a la justicia ordinaria. Tras los acontecimientos de Bagua, que causaron la muerte de 33 personas, el tribunal militar inició procesos contra varios agentes de policía nacionales por incumplimiento de sus deberes. En cuanto a la justicia ordinaria, se han entablado procesos penales por homicidios con agravantes y por lesiones corporales graves, que siguen su trámite. Asimismo, se están llevando a cabo investigaciones preliminares sobre los casos de Celendín y Bambamarca.

19. En lo que atañe a la cuestión de la esterilización forzada, la Fiscalía de la Nación ha decidido reabrir las investigaciones de estos casos y, para ello, ha procedido a ampliar las competencias de la Fiscalía Supraprovincial de Lima. Se han recibido quejas por parte de agrupaciones de mujeres cuyos casos no se han investigado. El Estado parte informará oportunamente al Comité de los resultados de estas investigaciones.

20. Como parte de las medidas destinadas a establecer el paradero de las personas desaparecidas, se ha aplicado una estrategia integral para afrontar este problema, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja. El objetivo consiste en exhumar los cadáveres por motivos humanitarios, esto es, para que las familias puedan recuperarlos. La Fiscalía de la Nación cuenta con un programa forense, elaborado y aprobado anualmente, en el que participan los representantes de las organizaciones de víctimas. La Fiscalía está dotada de un laboratorio moderno, que presta asistencia técnica para las investigaciones y el análisis de ADN. También hay un equipo forense especializado que, hasta la fecha, ha recuperado más de 2.000 cadáveres.

21. Cabe señalar que efectivamente se dispone de leyes para sancionar a las personas que someten a los trabajadores a condiciones laborales inhumanas.

22. El Protocolo de Estambul es aplicado por un experto en todos los presuntos casos de tortura. A la hora de examinar los casos sospechosos de tortura, los expertos en tanatología y ciencias forenses aplican las disposiciones de los Protocolos de Minnesota, Kyoto y Estambul.

23. **El Sr. Delgado Gutiérrez** (Perú) afirma que existe un marco legal para reglamentar el uso de la fuerza por la policía; el uso proporcional de la fuerza forma parte de la cultura institucional de las policía y las fuerzas de seguridad. Existen reglamentos, directrices y procedimientos relativos al uso de la fuerza, incluidos un manual de derechos humanos para la policía y un código de conducta policial. Tras los acontecimientos de 2011, en los que se había recurrido al uso excesivo de la fuerza, se recordó a la policía que sus acciones tienen que ajustarse a las disposiciones legales nacionales e internacionales que regulan el uso de la fuerza, y que el manual de derechos humanos tiene que utilizarse a lo largo de toda la formación policial. Ninguna de las disposiciones legales que regulan el uso de la fuerza exime a los policías de su responsabilidad personal.

24. Por lo que respecta a la prevención de la violencia, se están adoptando medidas para prevenir las violaciones de los derechos humanos mediante cursos de capacitación organizados por el Ministerio de Defensa, actividades de capacitación sobre derechos humanos y cursos de actualización focalizados en los derechos humanos.

25. En cuanto a la sugerencia del Sr. Wang Xuexian respecto a la evaluación de los efectos que tienen las actividades de capacitación dirigidas a los funcionarios públicos, cabe señalar que las autoridades competentes la considerarán seriamente.

26. **El Sr. Mesones Castelo** (Perú) indica que, en el marco del sistema jurídico militar, las familias de presuntas víctimas de tortura, incluidos los jóvenes reclutas, tienen la posibilidad de ponerse en contacto con la Oficina de Asistencia al Personal del Servicio Militar, que investigará el caso y comprobará si ha habido tortura. De ser así, el caso se transmitirá al Ministerio Público. La competencia de la justicia militar no abarca las violaciones graves de los derechos humanos. Éstas son competencia de la justicia ordinaria.

27. En lo que se refiere al papel de las fuerzas armadas durante el período de violencia en el Perú, el Sr. Mesones Castelo señala que es difícil acceder a los documentos pertinentes que se encuentran en los archivos del ejército. Aun así, el Ministerio de Defensa se está esforzando por realizar investigaciones lo más eficaces posible y por asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia. De conformidad con la legislación actual, deberá presentarse un informe al comienzo y al final de todas las operaciones militares.

28. El uso de armas de fuego está regido por los Decretos Legislativos N° 1094 y N° 1095, en los que se estipula que estas armas sólo pueden utilizarse como medio de autodefensa o para defender a otras personas, y únicamente en los casos en que las medidas menos extremas resulten insuficientes. Asimismo, queda establecido que los miembros de las fuerzas armadas que utilicen armas de fuego deberán presentar un informe escrito a su superior. El uso de armas de fuego está, por tanto, bien reglamentado y no hay ninguna impunidad para el personal que haya sido declarado culpable de delitos.

29. **El Sr. Hurtado Riquelme** (Perú) dice que el uso de la fuerza por la fuerzas armadas está regido por las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1095 y de la directiva del Comando Conjunto relativa a la movilización de las fuerzas armadas en situaciones de emergencia y a las medidas de apoyo a la policía. Los miembros de las fuerzas armadas reciben capacitación sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario.

30. **El Sr. Burneo Labrín** (Perú) indica que, en el marco del sistema de justicia militar, sólo se puede juzgar a miembros del personal militar que hayan perpetrado un delito, y únicamente si se satisfacen tres condiciones: el autor del delito deberá estar en servicio activo, deberá haber incurrido en delito durante el servicio activo y el delito deberá consistir en la infracción de las normas jurídicas de las fuerzas armadas, como las disciplinarias o las relativas al acato de las órdenes de un superior. Los juicios en relación con los delitos comunes, las violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes internacionales, como los crímenes de lesa humanidad, son competencia de la justicia ordinaria, de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

31. En el Perú, la prescripción de la acción penal no se aplica al delito de tortura, para el que no se contempla ningún tipo de amnistía. Cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia condenó en 2009 al ex Presidente del Perú, Alberto Fujimori, fundamentándose en normas imperativas del derecho internacional que consideran las matanzas como crímenes de lesa humanidad, en lugar de hacerlo sobre la base del derecho convencional.

32. En los últimos años se han realizado avances paulatinos en materia de leyes y jurisprudencia, lo que garantiza que el público en general pueda gozar de una mayor protección contra la violencia; además, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que los derechos humanos tienen rango constitucional.

33. En cuanto a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, cabe mencionar que el artículo 37 del Código Procesal Constitucional establece el derecho de no ser discriminado por razón de orientación sexual. Si bien no existe ninguna disposición específica que establezca sanciones penales para la discriminación por razón de orientación sexual, el artículo 323 del Código Penal estipula que cualquier acto discriminatorio por motivo sexual es sancionable, una formulación cuyo alcance se considera más amplio que el de las que hacen referencia a la sexualidad. Asimismo, existen resoluciones sobre varios temas afines, como la discriminación en el lugar de trabajo, y varios gobiernos regionales han prohibido expresamente la discriminación por razón de orientación sexual, además de establecer las medidas de protección pertinentes. No existe ningún mecanismo de supervisión para la discriminación por razón de orientación sexual, pero esta cuestión se está examinando junto con las partes interesadas en el marco de la elaboración de un proyecto de ley de derechos humanos.

34. No se ha establecido ningún sistema para supervisar y aplicar las medidas de seguimiento de las recomendaciones del Comité, pero se tiene previsto crear un sistema destinado a supervisar las medidas de seguimiento para todos los órganos de tratados a los que el Perú debe informar.

35. **La Sra. Suárez Salazar** (Perú) señala que, en el marco de un plan integral de reparación, las víctimas de violencia, incluida la tortura, están protegidas por un seguro de salud que abarca la salud física y mental, así como la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. Con arreglo a una ley aprobada en 2009, basta con presentar un documento de identidad para recibir tratamiento en un centro de atención sanitaria; no hace falta presentar ningún otro documento. Por otra parte, se dispone de equipos especiales dedicados a la atención de la salud mental en las zonas más aquejadas por la violencia y se han publicado directrices sobre la prestación de apoyo psicológico y social para las familias de personas desaparecidas.

36. El aborto es legal sólo en los casos en que sea imprescindible para salvar la vida de la madre, en los casos de violación, o cuando la continuación del embarazo pueda ocasionar daños irreversibles. No se ha presentado ninguna denuncia respecto de la aplicación de las disposiciones relativas al aborto en 2011.

37. **El Sr. Chávez Basagoitia** (Perú) dice que su Gobierno ha tomado las medidas necesarias para someter al Congreso la Convención para reducir los casos de apatridia. En cuanto a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, las consultas al respecto aún no han finalizado.

38. La policía fronteriza no recibe ningún tipo de capacitación específica sobre el trato a los solicitantes de asilo o a las personas que solicitan el estatuto de refugiado, pues muchas de las personas afectadas pueden ingresar libremente en el Perú y presentar una solicitud para obtener asilo o el estatuto de refugiado ante el servicio correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores en la capital. No se ha informado de ningún caso en el que se haya devuelto a solicitantes de asilo o refugiados en las fronteras, o en que las personas devueltas a sus países de origen hayan sufrido violaciones de sus derechos. El principio de no devolución se aplica en todos los casos, a excepción de los que involucren a personas que podrían representar un peligro para el Perú.

39. El estado de emergencia sólo puede declararse en circunstancias excepcionales y no puede durar más de 60 días. La zona en que actualmente está vigente el estado de emergencia puede parecer extensa, pero la medida afecta en realidad sólo al 6% de la población. Todo estado de emergencia impone restricciones a las libertades individuales y a la circulación, y las autoridades o la justicia pueden cerciorarse en todo momento de que este se ajusta a las prescripciones legales. Los tribunales militares pueden juzgar casos durante un estado de emergencia, pero algunos procedimientos, como el *habeas corpus*, nunca se suspenden.

40. El Perú es líder mundial en lo que atañe a los derechos de los pueblos indígenas y ha participado en las negociaciones iniciales para el establecimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Se han introducido varios instrumentos legislativos para proteger los derechos de los pueblos indígenas, entre los que se incluyen leyes relativas a la silvicultura y al uso de los hidrocarburos.

41. Con respecto a las denuncias de trabajo forzoso y de servidumbre por deudas en zonas alejadas, se ha establecido una comisión nacional para erradicar el trabajo forzoso, se ha impartido capacitación sobre el tema a un equipo de inspectores y se ha elaborado un plan de acción nacional sobre el trabajo forzoso con la ayuda de la Organización Internacional del Trabajo. La multa aplicable a los empleadores que hayan sido cómplices en casos de trata o de trabajo forzoso asciende hasta un máximo de 27.000 dólares de los EE.UU.

42. **El Sr. Ávila Herrera** (Perú) señala que el Ministerio de Justicia ha examinado la posibilidad de aumentar los pagos de indemnizaciones a las víctimas de violencia y ha tomado medidas para acrecentar el número de beneficiarios de estos pagos. Pese a las demoras en la elaboración de la lista de beneficiarios, es probable que unas 10.000 personas reciban indemnizaciones. Hay muchos casos en los que se han proporcionado medios de reparación adecuados para las víctimas de tortura.
43. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha investigado el caso de Barrios Altos y ha dictaminado que el Estado del Perú debe aplicar su mecanismo nacional para modificar la pena impuesta, puesto que esta no se ajusta a los criterios establecidos por la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional del Perú.
44. Las autoridades competentes han recibido una petición de indulto para Alberto Fujimori en la que no consta su firma. La comisión correspondiente ha indicado, por tanto, que el Sr. Fujimori debe firmar la petición, pero hasta el momento no se ha obtenido ninguna respuesta.
45. La Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia es una instancia de la Defensoría del Pueblo y le corresponde por ley proteger y promover los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
46. **La Sra. Sveaass** (Relatora para el país) solicita más información sobre los equipos profesionales de salud mental que participan en la prestación de apoyo a la víctimas de violencia y desea saber si la atención estará a cargo del servicio de salud pública o si se tiene previsto que el Gobierno subcontrate a otros organismos.
47. Pese a que la impunidad no existe en el Perú, el elevado número de personas absueltas de un delito, en gran parte a raíz de la falta de pruebas, plantea la pregunta de si las leyes pertinentes son lo suficientemente claras. Resultaría provechoso contar con más información sobre las penas impuestas en casos recientes de tortura, pues los datos estadísticos proporcionados no indican si en las condenas se aplican los largos períodos de encarcelamiento previstos por ley. Aunque queda claro que la competencia de los tribunales militares es limitada, la Sra. Sveaass pregunta quién supervisa los casos que se somete a esos tribunales. El caso específico en el que se calificó la violación como un acto de tortura es significativo, y agradecería que se le facilitaran referencias al respecto.
48. Al mismo tiempo que expresa preocupación por las medidas jurídicas relativas a los tratamientos sin consentimiento y al uso de restricciones en hospitales psiquiátricos, la Sra. Sveaass pregunta qué medidas se han adoptado para brindar salvaguardias legales a los pacientes que se encuentran en hospitales. Solicita información actualizada sobre el proceso de investigación de las resoluciones dictadas por los llamados jueces sin rostro en la década de los 90.
49. Agradecería que se le proporcionara más información acerca del Plan Nacional de Investigaciones Antropológico Forenses, indicando en particular si se acelerarían las exhumaciones de cadáveres, dado el elevado número de lugares en que se encuentran enterrados. Fuentes de información alternativas han indicado que los cadáveres no se entregan a las familias mientras siga en curso un proceso judicial relacionado con estos. ¿Podría la delegación confirmar esta información?
50. **El Sr. Wang Xuexian** (Relator para el país) indica que en las respuestas proporcionadas por el Perú se menciona que, en virtud del nuevo Código Penal, la prisión preventiva sólo se aplica en circunstancias excepcionales. A fin de aclarar si el nuevo Código tiene efecto, pregunta si se han dado nuevos casos de prisión preventiva desde su entrada en vigor. Tiene entendido que se han impuesto penas a varias personas involucradas en el asesinato de Gerson Falla. ¿Podría la delegación proporcionar información detallada sobre estas condenas?

51. Hay tres casos de violencia ejercida por agentes del orden que son motivo de mucha preocupación. El incidente de 2009 ya se ha investigado y las víctimas han recibido indemnizaciones, por lo que cabe preguntarse si ya se han investigado los incidentes más recientes de 2011 y 2012, que arrojaron un saldo total de 7 muertos y 40 heridos, sobre todo en lo que atañe al uso proporcional de la fuerza. El Sr. **Wang** Xuexian pregunta qué enseñanza se desprende de la investigación de los hechos de 2009 y si la delegación podría ofrecer pautas sobre el modo en que se deberían investigar estos incidentes.

52. El Sr. **Bruni** acoge con agrado la intención de adoptar disposiciones financieras a efectos del funcionamiento del mecanismo nacional de prevención, tal como lo prescribe el Protocolo Facultativo de la Convención.

53. Señala a la atención del Estado parte un informe del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (A/66/268), en el que se exhorta a los Estados a que prohíban la imposición de la reclusión en régimen de aislamiento, puesto que da lugar a varias secuelas físicas y psicológicas irreversibles. A la luz de las conclusiones del informe, insta al Estado parte a que reduzca sustancialmente el tiempo de reclusión en régimen de aislamiento al que son sometidos los detenidos, o elimine por completo esta práctica.

54. Al mismo tiempo que comprende la necesidad de contar con centros penitenciarios de alta seguridad, recuerda que la comunidad internacional ha recomendado en varias ocasiones que las cárceles de Challapalca y de Yanamayo se cierren, dadas las duras condiciones que imperan en esas alejadas localidades andinas. Tras realizar una visita en 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que ambas cárceles eran inadecuadas y recomendó que todos los detenidos fueran trasladados a otras cárceles. El Sr. **Bruni** pregunta si los presos de la cárcel de alta seguridad de la base naval del Callao siguen siendo objeto de medidas de privación sensorial o de reclusión en régimen de aislamiento, que se denunciaron en el pasado y que el Comité considera como formas de tortura.

55. La Sra. **Belmir** dice que, en vistas de las numerosas denuncias contra miembros de la policía y de las fuerzas armadas presentadas durante los estados de emergencia en el Estado parte, agradecería que la delegación formulara comentarios sobre las alternativas posibles a esta medida. Se pregunta cuáles son las razones por las que las denuncias terminan en tan pocas condenas y en tantas absoluciones.

56. Agradecería que la delegación respondiera a las denuncias según las cuales las personas acusadas de traición y subversión permanecen en detención policial durante más de dos semanas hasta ser llevadas ante un juez, así como a las que apuntan al hecho de que los jueces se ven a menudo ante la imposibilidad de hacer respetar los derechos de los detenidos a raíz de presiones ejercidas por el ejército y la policía. Pregunta si los tribunales militares que examinan esos casos observan las garantías de un juicio imparcial y respetan todos los derechos de los detenidos, incluido el derecho de apelación.

57. El Sr. **Mariño Menéndez** pide información adicional sobre el contenido del proyecto de ley sobre el femicidio y la fecha en la que se espera aprobarlo. Asimismo, desea saber si la Ley de Asilo se refiere específicamente al hecho de que las personas a las que se deniega el asilo diplomático no deben ser devueltas a sus países de origen si no queda explícitamente garantizado que estarán fuera de peligro. Pregunta si los crímenes de guerra presuntamente perpetrados por miembros de las fuerzas armadas durante el conflicto armado interno son competencia de la justicia militar o civil.

58. El Sr. **Gaye** pide indicaciones sobre el período máximo de prisión preventiva. Si éste es efectivamente de tres años, como lo tiene entendido, desea saber cuáles son las circunstancias que podrían dar lugar a un período de detención tan prolongado. También resultaría provechoso saber si el Código de Procedimientos Penales de 1940 sigue vigente

en algunas zonas y, de ser así, conocer los motivos por los que el nuevo Código no se ha hecho efectivo en todo el país.

59. **La Presidenta** pregunta si el Estado parte ha considerado la posibilidad de crear un mecanismo que haga las veces de sistema de coordinación para elaborar los informes que se deben presentar a los órganos de tratados de las Naciones Unidas, así como para difundir sus observaciones finales. Agradecería que la delegación indicara si las indemnizaciones otorgadas a las víctimas de los conflictos armados internos son suficientes y proporcionales a los daños que han sufrido. Asimismo, resultaría útil saber qué medidas se están emprendiendo para garantizar que el alto número de desplazados a causa del conflicto también obtengan reparación. Pregunta si las mujeres y las niñas que acuden a servicios de atención médica tras haber abortado clandestinamente tienen que identificar a la persona que llevó a cabo la operación, pues ello podría constituir una violación del artículo 15 de la Convención. Desea saber si el Estado parte tiene previsto despenalizar el aborto.

60. **El Sr. Ávila Herrera** (Perú) dice que la asociación nacional de las víctimas de la violencia política en el Perú exigió que la cuantía de las indemnizaciones se incrementara, de los actuales 10.000 nuevos soles a 38.000. El Ministerio de Justicia está evaluando la posibilidad de hacerlo, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas. Actualmente, las indemnizaciones se están desembolsando a aproximadamente 10.200 personas y al menos 6.000 personas más serán beneficiarias de indemnizaciones en el futuro. El Gobierno ha asignado unos 100 millones de nuevos soles para estas indemnizaciones.

61. La justicia militar no entiende en casos de violaciones de los derechos humanos. Tras los enfrentamientos de 2009 en Bagua, algunos miembros de las fuerzas armadas fueron juzgados ante la justicia militar por cargos relacionados con su responsabilidad profesional, pero todos los asuntos de derechos humanos fueron sometidos a la justicia civil.

62. La creación del Viceministerio de Derechos Humanos constituye un logro significativo para su país y se tienen muchas expectativas en cuanto a los avances que realizará. El Viceministerio es responsable de promover la reforma legislativa con miras a mejorar la puesta en conformidad de las leyes del Estado con las normas internacionales de derechos humanos. Junto con el Consejo Nacional de Derechos Humanos, también se encarga de aplicar las observaciones finales de los órganos de tratados de las Naciones Unidas.

63. El Viceministerio celebrará consultas con las autoridades penitenciarias para examinar la cuestión de los efectos que tiene la reclusión en régimen de aislamiento en la cárcel de máxima seguridad de la base naval del Callao. En 2001, se ha introducido un nuevo reglamento en la cárcel y el personal penitenciario civil, junto con el personal de la base naval, se asegura de que las condiciones carcelarias estén a tono con las normas internacionales. Por otro lado, se tomarán medidas para seguir mejorando las normas de trato y de seguridad en la cárcel de Challapalca. La cárcel de Yanamayo ha dejado de ser una cárcel de alta seguridad; todos los detenidos de este centro penitenciario proceden de zonas aledañas.

64. La reforma del procedimiento penal empezó en 2006, cuando el nuevo Código Procesal Penal entró en vigor en 1 de los 31 distritos judiciales del país. El nuevo Código se aplica actualmente en 23 distritos y se tiene previsto hacerlo efectivo en todo el país en 2015 a más tardar.

65. **El Sr. Cubas Villanueva** (Perú) señala que los juicios ya no son sustanciados por los llamados "jueces sin rostro" en su país. Estos empezaron a ejercer funciones durante la presidencia de Alberto Fujimori en 1992. Mediante una resolución dictada en 2001, el Tribunal Constitucional invalidó todos los procesos celebrados ante los jueces sin rostro; todos los casos correspondientes fueron objeto de una revisión judicial adecuada.

66. El Gobierno está instando al Instituto de Medicina Legal para que acelere el proceso de recuperación e identificación de los cadáveres de las víctimas de violencia policial. Los restos mortales se entregan a las familias en la mayor brevedad posible, pero en algunos casos no se presenta ningún familiar.

67. Desde 1991, el período máximo de prisión preventiva es de 18 meses, pero puede prorrogarse hasta 36 meses en circunstancias excepcionales. Sin embargo, este período no excede de más de nueve meses en la práctica. La prisión preventiva se impone sólo a las personas acusadas de delitos graves, como los actos de terrorismo.

68. El caso de Gerson Falla está siendo examinado por la justicia civil. Se encuentra actualmente en la fase de investigación penal, que concluirá en noviembre de 2012. Sin duda, el Fiscal Superior abogará por que los autores sean juzgados por actos de tortura con agravantes. Desde 2000, no se ha juzgado ningún caso de terrorismo en el marco del sistema de justicia militar.

69. **La Sra. Suárez Salazar** (Perú) indica que las disposiciones de salud mental aprobadas en 2009 han hecho posible el acceso a servicios de salud privados para los pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud. La ley relativa al internamiento de personas se ha modificado en 2012; ahora establece que todas las personas tienen que expresar su consentimiento informado, libre y voluntario antes de ser internadas, salvo en situaciones de emergencia. Otra modificación introducida en 2012 prescribe que las mujeres con discapacidad mental tienen que dar su consentimiento informado, libre y voluntario antes de ser esterilizadas. La ley relativa a los centros de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos también se ha modificado con miras a garantizar que se respete en todo momento el derecho del paciente a un servicio y un tratamiento de calidad. En cuanto al aborto, el Gobierno reexaminará esta cuestión.

70. **El Sr. Burneo Labrín** (Perú) señala que, si bien el Gobierno no cuenta actualmente con un mecanismo para dar seguimiento a las observaciones finales de los órganos de tratados de las Naciones Unidas, así como a las recomendaciones de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, se espera que el Viceministerio de Derechos Humanos ejerza esta función en el futuro. El Viceministerio también tiene previsto examinar y supervisar la jurisprudencia nacional sobre la tortura en el marco de las actividades de su mecanismo general de supervisión, lo que permitiría armonizar las actividades de las entidades de las regiones y del Gobierno. Actualmente está en curso el proceso de incorporación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el Código Penal del Perú.

71. **El Sr. Chávez Basagoitia** (Perú) indica que el estado de emergencia sólo se declara como medida de último recurso. En esas circunstancias, no todos los derechos se ven restringidos; las restricciones se limitan a los derechos relativos a la libertad y la seguridad de la persona, la inviolabilidad del hogar y la libertad de reunión y de tránsito. Estas restricciones han permitido a las fuerzas armadas apoyar a la policía a la hora de localizar y arrestar a dirigentes de grupos terroristas.

72. **La Sra. Sveaass** exhorta a la Defensoría del Pueblo a que dé seguimiento a la aplicación de los planes de reparación para las víctimas de violencia política.

73. **El Sr. Herrera** (Perú) asegura al Comité que el Viceministerio de Derechos Humanos tiene la determinación de aplicar el Plan Nacional de Derechos Humanos y de cumplir con sus demás obligaciones.

74. **La Presidenta** agradece a la delegación por el diálogo fructuoso y constructivo que ha mantenido con el Comité y la invita a presentar cualquier respuesta adicional por escrito dentro del plazo de 24 horas.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.